

EN el momento en que comenzaba una nueva hostilidad del Partido Comunista contra el Gobierno demócratacristiano en Italia, se produce un nuevo escándalo de corrupción política-policíaca: la fuga del fascista Ventura, que pone en peligro al Gobierno —débil, se dice, con una estructura de la Policía, la judicatura y el sistema penal, y con los servicios secretos, a los que se acusa—, el cual se defiende despidiendo al jefe de la Policía Nacional, Giuseppe Parlato. La resonancia de esta fuga se debe, sobre todo, a que sucede tres meses después de otra de la misma índole, la del también fascista Franco Freda. La coincidencia de estas fugas con una nueva ola de violencia parece subrayar lo que se considera la incapacidad del Gobierno de sostener el orden público.

El tema en sí es escandaloso. Franco Freda y Giovanni Ventura eran dos de los principales acusados por la explosión de una bomba en Milán que causó catorce muertos. El atentado se produjo hace diez años, en 1969; sin embargo, el juicio no se había celebrado hasta ahora. Parecía que había una serie de maniobras de dilación y, desde luego, un inmenso enredo de declaraciones y contradicciones que dificultaban la labor de los magistrados, que a su vez trabajaban bajo toda clase de amenazas. Las acusaciones principales de la oposición eran las de que los servicios secretos y parte de la Policía estaban en conexión con los neofascistas, y concretamente con algunos de los juzgados en Catanzaro. Esa supuesta complicidad continuaría existiendo: tanto por proteger a los acusados como por evitar que en el juicio se llegara a las supuestas fuentes del neofascismo. Giovanni Ventura asistía al proceso de Catanzaro, pero estaba en prisión domiciliaria. Hay una ley en Italia que impide que la detención preventiva se prolongue más de dos años antes del juicio. Y de su domicilio desapareció sin problemas Giovanni Ventura, como antes había desaparecido Franco Freda. "El mecanicismo de las investigaciones se puso en marcha lentamente, presidido por el estupor y la incertidumbre, como había ya sucedido tres meses atrás por la fuga de Franco Freda —escribe el 'Corriere della Sera'—. Los autos de la Policía han comenzado a recorrer las calles a sirena desplegada. Un ritual que había



La ofensiva comunista está en marcha; el PCI acusa al Gobierno de no cumplir sus pactos, sobre todo en lo que se refiere al segundo partido de Italia. En la foto: Berlinguer y Andreotti.

ITALIA

Las fugas de los fascistas

que cumplir, pero todos sabemos que el juego estaba ya hecho...". Mientras, "squadrismi" —fascistas— y "brigatisti" —izquierdistas— continúan provocando actos de violencia en las calles.

Todo ello amenaza al Gobierno en un momento en que se encuentra en una situación precaria, y aumenta la posibilidad de una disolución del Parlamento y una convocatoria de elecciones generales. La ofensiva comunista está en marcha: el partido acusa al Gobierno de no cumplir sus pactos, sobre todo en lo que se refiere al segundo partido de Italia. El pacto era de carácter parlamentario, y se refería a la necesidad de que la Democracia Cristiana gobernara con el acuerdo de los principales partidos; pero —dicen los comunistas—, la Democracia Cristiana está cada vez más dominada por su facción de la derecha, y esa facción está impidiendo la llamada apertura hacia la izquierda y los términos del contrato con los otros partidos. A su vez, el Partido Comunista italiano está sufriendo una deteriorización de carácter electoral, como consecuencia de su pacto con la derecha: estaría, quizá, en su interés volver a tomar la bandera de la oposición y, desde ella, provocar unas elecciones generales que, por lo menos, le sirvieran dando su fisonomía de segundo partido del país, aunque no pudiera gobernar. En

"Passe Sera", periódico de carácter comunista —aunque no órgano del partido—, se publica una caricatura con motivo del sesenta cumpleaños del Presidente del Gobierno, Andreotti: se ve la cara del Presidente recibiendo la tarta de cumpleaños, como en las películas mudas, aplastada por una mano no identificable, pero que se supone que es la del pueblo. O la del partido. Mientras, "L'Unità" —que sí es órgano del partido— ataca severamente a Zaccagnini y a otros personajes de la Democracia Cristiana: Zaccagnini, que ha ido a Washington... ¿A qué? Se recuerda que poco antes de la entrada de los comunistas en el pacto parlamentario, el mismo personaje hizo un viaje a Washington, y se dijo que había ido a contar la comprensión de los Estados Unidos para ese movimiento político. Tal vez haya ido ahora, en el momento en que los Estados Unidos parecen repudiar las fórmulas eurocomunistas que en un momento les despertaron cierto interés, para explicar la necesidad de que el PCI se mantenga dentro de la mayoría y que tal vez, para ello, la DC tenga que hacer alguna que otra concesión. Y para advertir de la aproximación del PCI a la Unión Soviética, como consecuencia de las nuevas circunstancias.

La inquietud que producen estos movimientos comunistas —ataque al Gobierno, aproxima-

ción a la URSS, endurecimiento en una postura de oposición— se refleja en parte en la industria. Guido Carli, presidente de la Confindustria —la confederación patronal—, publica un artículo en la revista "Panorama" defendiendo la necesidad de que continúe la "política nacional", es decir, el acuerdo del Gobierno con los distintos partidos, incluido el Comunista. Se trata de evitar que, al romperse la actual coalición, o la política de consenso, se produjera "la contraposición áspera entre fuerzas políticas que, no sin manifestaciones de insuficiencia, han estado y están colaborando" y con esta colaboración han realizado progresos "hacia la solución de algunos de los problemas más graves que asaltan a la sociedad italiana", como por ejemplo el control de los gastos públicos a través de las leyes financieras: "Una pequeña revolución que no hubiera sido posible sin el apoyo de una mayoría ampliada". Carli parte en defensa de los comunistas que no son nombrados para cargos públicos por su condición de militantes: "Sorprende que, entre nosotros, los hombres que pertenecen a uno de los partidos de la mayoría sean considerados como inelegibles". La posición de la industria es clara: ante una posibilidad de ruptura, y de un pase de los comunistas a la oposición, temen que los conflictos sociales se multipliquen, y que los sindicatos no tengan fuerza para contener las huelgas. Prefiere un Partido Comunista con el que negociar abiertamente que un Partido Comunista que presiona por otros medios, y que pone al descubierto la debilidad económica y social de las estructuras del país.

La Democracia Cristiana está ahora proponiendo una nueva reunión de secretarios generales de los partidos para tratar de conjurar la crisis. En momentos en que las violencias aparecen de nuevo y se ve envuelta en el escándalo de las fugas de los fascistas, está en una considerable inferioridad; y su ala derecha sigue presionando —según consideran los comunistas— para evitar cualquier concesión. Una forma contradictoria de enfrentarse con un momento particularmente difícil, que puede arrastrarle a unas elecciones generales que no desea, y que se desarrollarían en un ambiente de inseguridad, de violencia y de terrorismo que podrían influir sobre los resultados. ■

JUAN ALDEBARAN.